

# COMMONS

## Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital

Publicación bianual

ISSN 2255-3401

Para citar este artículo:

Firpo, M. & Ferreira, D. (2018). ¿Desarrollo para qué y para quién? La experiencia del Mapa de Conflictos relacionados con la injusticia ambiental y la salud en Brasil. *Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital*, 7(1), 193-221  
<http://dx.doi.org/10.25267/COMMONS.2018.v7.i1.07>

Fecha de recepción: 2/12/2017

Fecha de aceptación: 6/4/2018

# ¿DESARROLLO PARA QUÉ Y PARA QUIÉN? LA EXPERIENCIA DEL MAPA DE CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA INJUSTICIA AMBIENTAL Y LA SALUD EN BRASIL

## DEVELOPMENT FOR WHAT AND FOR WHOM? THE EXPERIENCE OF THE MAP OF CONFLICTS RELATED TO ENVIRONMENTAL INJUSTICES AND HEALTH IN BRAZIL

Marcelo Firpo de Souza Porto

[mfirpo2@gmail.com](mailto:mfirpo2@gmail.com)

Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra (Portugal)

Diogo Ferreira da Rocha

[diogo.f.rocha@gmail.com](mailto:diogo.f.rocha@gmail.com)

Fundación Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro, Brasil)

### Resumen

El artículo presenta la experiencia, resultados y reflexiones del mapa de conflictos relacionado con injusticias ambientales y salud en Brasil, un proyecto que identifica, sistematiza y hace públicos casos emblemáticos de conflictos ambientales. Estos derivan principalmente de actividades económicas y políticas de un modelo de desarrollo neoextractivista que impactan, discriminan y vulnerabilizan distintos pueblos y comunidades que viven y trabajan en los territorios afectados. A lo largo del texto presentamos el concepto de conflicto ambiental en el marco de la ecología política. A continuación, hacemos una conexión entre los conflictos con el marco de la economía política del desarrollo, argumentando qué escuelas teóricas son más (in)compatibles. Finalmente, presentamos el Mapa de Conflictos, sus objetivos, metodología y principales resultados encontrados. Las estrategias de comunicación con el uso de internet y el audiovisual se constituyen como innovaciones importantes en las luchas territoriales, las denuncias y anuncios de alternativas de vida y desarrollo.

### Abstract

*The article presents the experience, some results and reflections of the map of conflicts related to environmental injustices and health in Brazil, a project that identifies, systematizes and makes public emblematic cases of environmental conflicts. These are derived from economic activities and public policies for "development" that impact, discriminate and make vulnerable different peoples and communities living and working in the affected territories. Throughout the text we present the concept of environmental conflict within the framework of political ecology. Then we make a connection between conflicts with the political economy of development, arguing which theoretical schools are more (in)compatible with what was presented previously. Finally, we present the Map of Conflicts, its objectives and methodology, characteristics and main results found in Brazil. Most conflicts are associated with the advance of agroindustrial monocultures and mining, that is, with the neoextractivism*

### Palabras clave

Ecología política, conflicto ambiental, desarrollo, mapa, Brasil

### Keywords

Political ecology, environmental conflict, development, map, Brazil

## 1. Introducción: conflictos ambientales en el marco de la ecología política

El texto presenta la experiencia, algunos resultados y reflexiones a partir del *Mapa de conflictos relacionados con las injusticias ambientales y de salud en Brasil* (Porto, Pacheco & Leroy, 2013). Se trata de una investigación que busca, esencialmente, identificar, sistematizar y hacer públicos los conflictos ambientales de luchas contra las injusticias y el racismo ambiental en los territorios donde fueron, están o serán implementados diferentes proyectos económicos y políticas gubernamentales. Tales proyectos y políticas a menudo terminan por impactar, discriminar y vulnerabilizar a personas, pueblos y comunidades que viven y trabajan en esas áreas, y caracterizan la distribución desigual de beneficios y cargas que marcan situaciones de injusticia ambiental.

Los conflictos socioambientales, o simplemente ambientales, son un tema central de la Ecología Política (Martinez-Alier, 2002). Los conflictos se encuentran presentes en diversos continentes y países. Su emergencia e intensificación proviene de una visión economicista y restrictiva del desarrollo pautada por criterios productivistas y consumistas. Por lo tanto, tales criterios no respetan la vida humana y la de los ecosistemas, así como la cultura y los valores de los pueblos en los territorios donde las inversiones, las cadenas productivas y comerciales se realizan. Así como políticas públicas que dan soporte a tales inversiones en nombre del “crecimiento económico” o del “desarrollo”.

La apropiación de los recursos naturales y espacios públicos para fines específicos, que generan exclusión y expropiación, producen reacciones por parte de movimientos sociales, grupos y poblaciones que tienen vulnerados sus derechos fundamentales. Tales movilizaciones son, en muchas ocasiones, fruto de movimientos por la justicia ambiental e involucran cuestiones como salud, trabajo, cultura, otras economías, contaminación ambiental y humana, defensa del medio ambiente y uso democrático y sostenible de los bienes comunes.

En la Ecología Política, los conflictos son el resultado de las contradicciones existentes en el comercio desigual e injusto entre países del actual capitalismo globalizado. Al articular la ecología política con la economía ecológica teniendo por base el análisis del metabolismo social, Martinez-Alier (2002) suministra una importante base teórica para entender los conflictos socio-ambientales, así como los conflictos distributivos, productos de las desigualdades y contradicciones resultantes de los procesos económicos y sociales de desarrollo, que forman 'centros' y 'periferias' mundiales y regionales. Tales conflictos, sin embargo, son intensificados en sociedades marcadas por fuertes asimetrías de información y poder, desigualdades sociales, racismo y otras formas de discriminación, en especial de género y étnica.

En América Latina (AL), solamente a partir de los años 90, la relación entre medio ambiente, salud, derechos humanos y justicia pasó a formar parte claramente de la agenda de algunos países y movimientos sociales con la adopción del concepto de justicia ambiental. En AL, las situaciones de injusticia ambiental emergen más intensamente en función de la elevada desigualdad social y discriminación étnica, así como de su inserción en la economía internacional globalizada a partir de la explotación intensiva y simultánea de recursos naturales y fuerza de trabajo, es decir, por su papel en la exportación de *commodities* agrícolas, metálicas y de la energía. Se trata, según autores como Gudynas (2012), del neoextractivismo, asumido por diversos países en los últimos 20 años, incluso por gobiernos considerados progresistas que aprovecharon las *commodities* influenciadas por demandas de China para reducir la deuda externa e implementar políticas sociales redistributivas.

Brasil es emblemático, a pesar de su relativo desarrollo económico, industrial e institucional, en comparación con otros países latinoamericanos, está también marcado por una fuerte concentración de renta y poder y, por lo tanto, de incontables situaciones de injusticia ambiental. En Brasil, desde finales del siglo XX, hubo un claro proceso de reprivatización de la economía en función de la intensificación de actividades mineras y de la agricultura de exportación (Carvalho & Carvalho, 2011), con expansión en regiones relativamente preservadas u ocupadas por pueblos indígenas, quilombolas y campesinos (Fundación Oswaldo Cruz, 2016).

No hubo interrupción en ese proceso a lo largo de los gobiernos del PT (Partido de los Trabajadores), aunque las políticas redistributivas y sociales tuvieron un importante impacto en la reducción de la pobreza y mejora de indicadores de calidad de vida (Milanez & Santos, 2013).

## 2. Conflictos ambientales en el marco de la economía política del desarrollo

Como acabamos de mostrar, hay una clara relación entre los conflictos ambientales y la Economía Política del Desarrollo, un campo de conocimiento interdisciplinario formado por economistas, politólogos, sociólogos, juristas, geógrafos y antropólogos. Según Hidalgo-Capitán (2011), existen al menos siete escuelas de Economía Política del Desarrollo construidas desde la Segunda Guerra Mundial dedicadas al estudio del desarrollo con distintos paradigmas competitivos entre sí.

Para su propuesta de tipología, el autor inicialmente diferencia las escuelas de acuerdo con sus posiciones en función de aceptar o rechazar dos cuestiones fundamentales sobre el tema del desarrollo: (I) la aplicación de la misma economía convencional a países desarrollados y subdesarrollados, o sea, la tesis de la “monoeconomía”; (II) la existencia de un beneficio mutuo en las relaciones económicas internacionales entre países desarrollados y subdesarrollados, es decir, la tesis del beneficio mutuo. Más allá de situaciones de aceptación o rechazo, hay posibilidades que incorporan, además, las opciones intermedias de la aceptación de una monoeconomía alternativa y la condicionalidad del beneficio mutuo. Con eso tenemos una matriz en la que surgen las siete escuelas: de la modernización, la estructuralista, la neomarxista, la neoliberal, la neoinstitucionalista, la islamista y, finalmente, la escuela alternativa. Para completar su propuesta, el autor analiza la posición de cada una de las siete escuelas de acuerdo con la concepción de desarrollo, subdesarrollo y cuál es la variable clave del desarrollo, así como cuál es la estrategia política, el proceso y la financiación que conducirían al desarrollo.

En este punto, no interesa profundizar en las características de esas escuelas según la tipología propuesta por Hidalgo-Capitán. Lo que nos interesa es pensar qué concepciones de desarrollo son más compatibles o, al contrario, incompatibles con la Ecología Política, el concepto de conflicto ambiental y la comprensión de los movimientos para la justicia ambiental, en especial, de cómo ha sido construido en la realidad de AL y Brasil.

La primera y más obvia consideración es la incompatibilidad de concepciones que claramente se vinculan a una idea de progreso o crecimiento económico dentro del capitalismo como única salida posible del “subdesarrollo”. Tal concepción desprecia problemas socioambientales o los considera como situaciones puntuales, como externalidades negativas al ser enfrentadas por ajustes del propio mercado, incluso por políticas e instituciones creadas por los nuevos mercados (carbono) y que regulen la propiedad de los recursos naturales. Es decir, la economía verde o, de forma más crítica, la mercantilización de la naturaleza y los espacios comunes. La escuela que asume tal posicionamiento es la neoliberal, que a lo largo de las últimas décadas asumió ampliamente la hegemonía como base académica e ideológica de los juegos políticos e institucionales por detrás del proceso de globalización capitalista más reciente.

Como observa Hidalgo-Capitán (2011), a partir de los setenta hubo una pérdida de fuerza de otras perspectivas más flexibles, principalmente de aquellas influenciadas por trabajos de economistas como John Maynard Keynes, que veían al mercado capitalista, la industrialización y la distribución de riquezas con un rol mucho más activo del Estado. Eso, ligado a la heterogeneidad y fragmentación ya sea de países “en desarrollo” o de otras escuelas y concepciones que estaban por germinar en las décadas siguientes, son responsables de la extinción de la escuela de la modernización y del crecimiento de la perspectiva neoliberal como la gran defensora de la concepción modernizante del capitalismo. La escuela neoliberal asumió en las últimas décadas un fuerte papel en la dirección y construcción de políticas de organismos internacionales tales como FMI, Banco Mundial, OCDE y OMC. Por lo tanto, la concepción neoliberal de desarrollo es considerada como el adversario más importante para distintos grupos intelectuales y militantes que actúan en la crisis ecológica y los conflictos ambientales.

Otra cuestión, más compleja de ser discutida, es cómo las escuelas más críticas al neoliberalismo y al capitalismo pueden ser comprendidas ante las crisis y los conflictos socioambientales.

Ciertamente la escuela neomarxista tiene importantes aportes a partir de su perspectiva ecosocialista (O'Connor, 2001; Foster, 2005 & Löwy, 2005) que permiten analizar características y procesos que relacionan la expansión del capitalismo y la intensificación de la crisis ecológica. Por ejemplo, O'Connor (2001) considera que es necesario incorporar un segundo gran tipo de conflicto para entender la crisis contemporánea del capitalismo, en articulación con el clásico conflicto capital-trabajo asociado a la sobreexplotación del trabajo y la distribución de la riqueza. El nuevo conflicto estaría asociado a la crisis de la (re)producción social y ambiental, y sus relaciones con las condiciones de producción. Las nuevas luchas políticas involucrarían nuevos sujetos políticos como protagonistas: ecologistas, mujeres, campesinos, pueblos indígenas, movimientos antirracistas y de otros grupos étnicos.

Como observa Hidalgo-Capitán (2011), un elemento importante para diferenciar el neomarxismo de otras concepciones críticas, como el aporte de la teoría de la dependencia construida en el ámbito de la escuela estructuralista a partir de intelectuales latinoamericanos que trabajaran en CEPAL como Raúl Prebisch y Celso Furtado, es la idea central para los neomarxistas de que es imposible el desarrollo de los países periféricos bajo el capitalismo.

Pero hay otros elementos que crean obstáculos importantes para que las concepciones neomarxistas puedan avanzar en articular teorías y prácticas sociales de transformación ante la crisis ecológica y los conflictos ambientales. Tales obstáculos se refieren a la idea central del materialismo histórico –con pretensión universal a ser seguida en todas las regiones y países dependiendo de la maduración histórica para la revolución nacional popular– de que el desarrollo



solamente sería posible con la instalación de un sistema de gobierno que desplace del poder a las burguesías y rompa con el imperialismo neocolonial. La tarea del gobierno socialista asume la perspectiva de una monoeconomía, la marxista, cuya tarea fundamental sería promover una continua reinversión del excedente económico y una industrialización estratégica que favoreciera el aumento, la renta y, posteriormente, distribuirla al pueblo.

La cuestión aquí, además de los análisis y críticas posibles de las experiencias revolucionarias y del socialismo real construidas a lo largo del siglo XX, es el rol secundario de la dimensión ecológica y los conflictos relacionados con los procesos económicos y políticos considerados más relevantes para la transformación social y el desarrollo. Sin embargo, hay otro tema aún más relevante: la concepción de desarrollo aquí presupone un proceso evolutivo que hace difícil concebir otras posibilidades de interacción con la naturaleza fuera del control continuo, posible gracias a los avances científicos y tecnológicos. Posibles alianzas entre militantes estrictamente marxistas con luchas indígenas o conceptos como el *buen vivir*, ocurren como acciones coyunturales y tácticas, a veces con cierto malestar ante las contradicciones conceptuales derivadas de lo que se señaló anteriormente. No obstante, la fuerza del marxismo permanece viva en diversas corrientes intelectuales y políticas de AL que actúan en temas socioambientales delante de las enormes disparidades e injusticias sociales de la región.

Santos (2013), así como otros autores del grupo postcolonial o de los estudios de la modernidad/colonialidad, consideran tanto al marxismo como a la economía neoliberal como expresiones radicales y distintas de un mismo sueño de la modernidad. Es decir, expresan visiones eurocéntricas de centralización y universalización, ya sea por la idea de una forma de conocimiento superior y liberador, la de la ciencia moderna y sus tecnologías, o bien por el estructuralismo economicista en la determinación de las direcciones existentes y de los futuros posibles, lo que hace invisibles a otros saberes y alternativas.



Esta es una cuestión importante para nosotros, pues, la crítica de Santos apunta a la necesidad de superación de la tendencia del campo crítico hegemónico en ocultar y desconsiderar el saber de los pueblos y comunidades en situación de subalternidad social y vulnerabilidad ambiental en países marcados por el colonialismo. De acuerdo con Santos, el pensamiento occidental expresado en la ciencia, la política y la cultura es un pensamiento abisal que opera a partir de un sistema de distinciones variables e invisibles que dividen la realidad entre un lado reconocido y legítimamente aceptado y sus “Otros”, estos “producidos como inexistentes” (Santos, 2007: 4). En otras palabras, tornados irrelevantes, invisibles y dispensables.

Esta línea abisal entre el pensamiento occidental (hegemónico, socialmente legitimado y propagado como racional) y sus otros convertidos en inexistentes, se profundiza cuando envuelve a pueblos que han sido históricamente sometidos a los regímenes coloniales. Las relaciones coloniales, que van más allá del mantenimiento político de territorios, crean jerarquías entre formas de pensamiento, siendo los pueblos dominados vistos como primitivos e inferiores. De esta forma, se establecen líneas globales que distinguen lo que es o no es conocimiento y prácticas legítimas. Con base en la crítica postcolonial, muchos autores van a corroborar tal análisis, afirmando que el pensamiento hegemónico padece de las limitaciones de esa incapacidad de considerar la diversidad de pensamiento del mundo y de las múltiples formas de análisis que no están consideradas por el canon de la Ciencia (Walsh, 2008).

Asumiendo tales críticas, creemos que la escuela denominada por Hidalgo-Capitán (2011) como alternativa es la más compatible con las perspectivas de aquellos que trabajan con conflictos ambientales y movimientos de justicia ambiental. Según el autor, el surgimiento de esa escuela proviene de los trabajos seminales de dos indianos, Mohandas Gandhi (más conocido como Mahatma Ghandi) y su amigo y economista Joseph Kumarappa. Gandhi y Kumarappa han basado sus trabajos en

la idea fundamental de dignidad humana y en una economía centrada en satisfacer las necesidades y desafíos humanos mientras erradicaban el desempleo, la pobreza y la privación por medio de estrategias y acciones hacia la paz. Tal concepción de desarrollo como un proceso multidimensional de satisfacción efectiva de las necesidades de los individuos y comunidades es distintiva en esa escuela. Otras son la preocupación no tanto en aumentar la riqueza, sino en reducir la pobreza, al mismo tiempo que consideran otras necesidades de realización y dignidad que aproxima muy fuertemente a esa escuela con la moderna concepción de los derechos humanos. Sin embargo, actualmente no tiene, exclusivamente, un carácter heterodoxo sino también uno fragmentario en los numerosos y distintos aportes que, en las últimas décadas, diversos autores y corrientes del pensamiento alternativo han producido, sin que haya hasta ahora un concepto unificador de desarrollo.

Entre otros, pueden ser citados como importantes autores de esa escuela el economista indiano Amartya Sen, el chileno Manfred Max-Neef y su formulación del desarrollo a la escala humana; el noruego Johan Galtung en la investigación sobre la paz, las distintas formas de violencia y su propuesta de un mundo no centralizado con varios centros territoriales y comunitarios autónomos, focalizados en satisfacer localmente una amplia gama de necesidades humanas; del filósofo y humanista Ivan Illich, la idea de convivencialidad, que representaría el punto de equilibrio en el que una sociedad no crea más necesidades que aquellas a las que puede responder sin recurrir a una clase dominante opresora; los economistas involucrados en la construcción de indicadores del desarrollo humano y de la pobreza asumidos por PNUD en los noventa; economistas ambientalistas como Ignacy Sachs, con su propuesta de eco desarrollo como combinación de crecimiento económico, aumento igualitario en bienestar social y protección del medio ambiente, posteriormente propagado de manera crecientemente fragmentaria como desarrollo sostenible; autores que vinculan la idea de desarrollo con la participación democrática, como el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda y el brasileño Tarso Genro en el tema del presupuesto participativo.

Más recientemente y con fuerte conexión con la crisis ecológica, los cambios climáticos y los conflictos ambientales, surgen diversos autores de la economía ecológica y la ecología política como el estadounidense Herman Daly y el catalán Joan Martínez-Alier; del ecofeminismo como base del desarrollo sostenible, como la india Vandana Shiva. Creemos que, de especial interés, son los autores que en América Latina han formado parte del grupo modernidad/colonialidad, de forma similar al movimiento denominado Poscolonialismo, involucrando autores provenientes de las antiguas colonias inglesas o francesas en Asia, Oceanía, África y el Medio Oriente con un fuerte componente culturalista. El grupo modernidad/colonialidad en América Latina reunió un interesante grupo de sociólogos, economistas, antropólogos y filósofos que discuten el post-desarrollo y la perspectiva decolonial basada en la crítica a la dominación colonial, capitalista y patriarcal, con la consecuente negación del estilo de vida moderno de los países entendidos como desarrollados. Como ejemplos podemos citar los nombres de Arturo Escobar, Enrique Dussel, Walter Dignolo, Aníbal Quijano y Edgardo Lander, así como del portugués Boaventura de Sousa Santos que produce una obra muy amplia que articula distintas contribuciones provenientes tanto del Postcolonialismo como del grupo modernidad/colonialidad. Finalmente, es importante mencionar el movimiento intelectual y político que recientemente crece en Europa denominado *decrecimiento*, que tiene como representante más conocido al francés Serge Latouche. Se trata de una corriente de pensamiento político, económico y social que se opone al objetivo de crecimiento económico del liberalismo y el productivismo, y como alternativa propone una disminución regular de la producción económica con el objetivo de establecer una nueva relación social y ecológica de equilibrio ante la creciente e irreversible crisis socioambiental.

Aunque fragmentaria, consideramos la *escuela alternativa* como la más prolífica en cuanto a las numerosas posibilidades conceptuales, metodológicas y políticas que ofrece, y que permiten pensar y construir otros mundos posibles.

### **3. El mapa de conflictos relacionados con la injusticia ambiental y la salud en Brasil: referencias y metodología**

El proyecto, desde una perspectiva interdisciplinaria basada en contribuciones de la ecología política, sociología ambiental y de la salud colectiva, empezó en 2008 a partir de una articulación entre la Fundación Oswaldo Cruz y la Red Brasileña de Justicia Ambiental, con el objetivo de sistematizar casos emblemáticos de conflictos ambientales en todas las regiones de Brasil.

Actualmente son aproximadamente 570 casos de conflictos que están a disposición del público desde 2010 a través de un portal web con un sistema georreferenciado que utiliza la plataforma Google Maps, donde es posible el acceso a diversas informaciones como: tipo de población afectada (indígenas, campesinos, quilombolas, trabajadores urbanos, etc.), sectores económicos, riesgos ambientales y problemas de salud. La información principal es una narrativa del conflicto descrita a partir de la perspectiva de las poblaciones afectadas, así como de los grupos académicos y movimientos sociales aliados de ellas.

Una cuestión importante se refiere al rol de los mapas de conflictos ambientales. Descripciones y mapas como ese, son importantes instrumentos de lucha contra la injusticia y el racismo, ya que amplían la visibilidad de las denuncias y luchas de poblaciones cuyas vidas están amenazadas. La propuesta de nuestro mapa no es solo una plataforma, sino que también funciona como un escudo en un mundo económico de violencia contra los pobres y discriminados por el racismo ambiental. Demuestra una articulación solidaria entre grupos académicos y organizaciones no gubernamentales con las demandas de los movimientos sociales y las poblaciones afectadas por las operaciones económicas, o el fracaso de las políticas e instituciones públicas.

La búsqueda de un conflicto se inicia con la identificación de su ausencia en la base de datos a partir de las denuncias recibidas a través del formulario de contacto del portal, indicaciones de los investigadores o militantes vinculados al conflicto o seguimiento del programa de noticias, medios alternativos y las páginas de los movimientos sociales.

Después de consultar las fuentes de información disponibles (estudios, informes institucionales, juicios, entrevistas, videos, noticias, blogs, redes sociales, documentos preparados por los grupos implicados, etc.), el investigador construye un relato detallado de este caso y una cronología que lo resume. Este material es registrado y clasificado de forma digital a partir de una tipología estandarizada construida colectivamente con RBJA, la Red Brasileira de Justicia Ambiental.

A continuación, el caso es revisado dos veces. En la primera revisión, el texto es analizado desde sus aspectos formales: la escritura, la claridad, la cohesión, etc. En la segunda revisión, que denominamos revisión política, se analiza la consistencia de la información: si son consideradas las diversas dimensiones de las disputas, o si hay coherencia entre el texto y las metas políticas de los movimientos sociales. La investigación es orientada por una opción ética de no causar daño a los movimientos sociales. Buscamos que cualquier influencia de nuestro trabajo debe ser positiva para las comunidades más afectadas y vulnerables.

Por último, cada caso es georreferenciado y se inserta en una plataforma disponible en la web por un equipo especializado del Instituto de Comunicación e Información Científica y Tecnología en Salud de la Fundación Oswaldo Cruz. Periódicamente, se revisan los casos para identificar posibles cambios que se deban hacer en los informes.

## 4. Resultados y discusiones

Los conflictos ambientales en curso en Brasil ponen en disputa la propiedad, la posesión o el uso de la tierra; la explotación de los bienes comunes que estén situados en los territorios; el poder de definir las reglas de acceso, uso y los límites de las relaciones con la naturaleza; la legislación y procedimientos administrativos que (des)regulan la propiedad o la gestión de los bienes comunes; las concepciones y discursos legítimos sobre las relaciones con la naturaleza y responsabilidades en relación con los impactos o la pérdida de la vitalidad de los ecosistemas ambientales; las formas de hacer frente a las consecuencias sobre la salud humana.

En estos contextos, el Estado tiene un papel ambiguo: por un lado promueve las condiciones que hacen viable los emprendimientos o las políticas económicas que generan conflictos ambientales y, al mismo tiempo, establece los procedimientos que guiarán las acciones de los grupos sociales y las arenas donde las luchas ocurrirán.

El poder legislativo en Brasil es cada vez más dominado por los intereses corporativos, especialmente la agroindustria y la minería. Por un lado, es un espacio de frecuentes disputas en relación con el establecimiento de marcos regulatorios que reconocen territorialidades distintas y las relaciones que pueblos y comunidades tienen con los ecosistemas que componen sus territorios; por el otro, han aprobado leyes que priorizan los intereses económicos y la mercantilización de los bienes comunes en detrimento de las vidas de humanos y no humanos. La democracia de muy baja intensidad en Brasil ha implicado recientemente en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 como Jefa de Estado y la prisión del ex presidente Lula da Silva. Desde entonces, Brasil vive un momento grave de inestabilidad institucional e reducción de derechos sociales y humanos.

El poder ejecutivo tiene un papel clave en la formulación y aplicación de políticas públicas que pueden promover o mitigar los procesos de injusticia ambiental. Es el espacio donde la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de los ecosistemas y territorios se pueden realizar. Eso se produciría a través de políticas de protección de los derechos de grupos sociales vulnerables y de la licencia ambiental de empresas potencialmente peligrosas. Pero a menudo estimula programas y cambios de procedimiento que, al contrario, minan los derechos.

Los distintos órganos judiciales tienen papeles estratégicos en estos contextos. En primer lugar, debido a la creciente judicialización de las controversias y los intentos de criminalizar a los movimientos sociales involucrados. En segundo lugar, debido a que la función de los ministerios y defensores públicos en defensa de los derechos humanos y colectivos que actúan, en tesis, para equilibrar la asimetría de poder entre los agentes sociales.

Sin embargo, hay ocasiones en que las disputas involucran la legitimización de las reivindicaciones o los proyectos de los agentes sociales. Por lo tanto, los medios de comunicación y el ámbito académico juegan un rol importante tanto para establecer legitimidades como para desafiarlas. Son disputas simbólicas que tienen lugar principalmente a través de estrategias discursivas y manejo de las asimetrías en la distribución social del conocimiento y de la información. En esos momentos, la producción compartida de redes de conocimiento y la educación popular se convierten en estratégicas, sobre todo cuando el lenguaje técnico-científico es utilizado por los grupos hegemónicos para hacer invisibles los saberes de los que más sufren los efectos de las políticas de desarrollo.

En nuestro Mapa, la población rural es la más afectada. En una encuesta realizada en febrero de 2016, en un universo de 570 casos de conflictos, el 32% de ellos involucraba la participación de la agricultura familiar, el 29% de los pueblos indígenas, el 22% y el 16% quilombolas (descendientes de negros esclavos cimarrones) y pescadores. Están ubicados principalmente en las regiones Nordeste (32%) y Norte (26%).



La mayoría de los conflictos fueron directa o indirectamente asociados con el avance de los monocultivos agroindustriales (16% del ganado, de la madera: 15% y la pesca o camarones: 7%) y minería (18%). Aproximadamente, el 4% de los casos estaban relacionados con la industria química o petrolera.

En cuanto a los impactos y los riesgos ambientales asociados a este tipo de conflictos, el más significativo es la ruptura de las relaciones tradicionales de las comunidades involucradas en sus territorios. Aproximadamente el 80% de los casos, se enfrentan a restricciones en sus actividades productivas o formas tradicionales de explotación de los ecosistemas. En algunos casos, estas prácticas quedarán completamente inviables. En el 46% de los casos, los conflictos se refieren precisamente al reconocimiento legal del territorio. Se produce el mismo porcentaje de casos cuando existe una resistencia al avance de la deforestación, lo que indica que hay casos en los que las interacciones tradicionales de los grupos afectados asumen el mantenimiento de la vitalidad de los ecosistemas frente a la explotación depredadora de los bienes comunes. Aproximadamente, el 30% de los conflictos tratan de luchas contra la contaminación química, y el 16% de los casos es la erosión del suelo la principal consecuencia de las actividades productivas.

En cuanto a los riesgos para la salud, al menos el 50% de los casos evaluados implican algún tipo de violencia. En el 43% de los casos, la ruptura de las formas tradicionales de subsistencia provocó situaciones de inseguridad alimentaria, y en el 13% de los casos llevó a casos de desnutrición. En el 38% fue observado el aumento de enfermedades crónicas y no transmisibles asociadas a cambios en las condiciones de vida o estilo de vida y trabajo precarizados. Las enfermedades transmisibles, especialmente vinculadas a los cambios demográficos y ecológicos, representaron alrededor del 16% de los casos.

Con el objetivo de superar esas situaciones, y romper con las injusticias ambientales a las que están sometidos, muchos pueblos y comunidades se han apropiado no solo de las tecnologías sino también de muchas concepciones innovadoras de comunicación como parte de sus estrategias de lucha (Fasanello, Araujo & Porto, 2016).

Un ejemplo es el pueblo Ikepung del río Jatobá, en Mato Grosso, que a pesar de ocupar actualmente un área en el Parque Indígena en el Xingu, reivindica desde 2002 el retorno a su territorio ancestral, de donde fueron removidos a la fuerza por el Estado brasileño en 1967.

Como parte de una estrategia de legitimación simbólica sobre el área de 270 hectáreas que ellos consideran su territorio tradicional, han recogido, a través del trabajo de la Asociación Indígena Moygu Comunidad Ikpeng (AIMCI), material histórico sobre el pueblo, como imágenes, videos, textos, dibujos y mapas que organizan en una base de datos digital bautizada como *Ukpamtowonpîn* (Origen del Mundo). Además, la AIMCI también realiza talleres de formación audiovisual e iniciación digital en la Casa de Cultura Mawo a fin de ampliar su capacidad colectiva en romper con el histórico proceso de invisibilización social y llevar otra mirada sobre la historia y cultura ikpeng a otras partes del mundo.

Apartir de estos talleres produjeron y lanzaron tres películas: *Somtximnayukunaky*, que en portugués significa “Grabando el sonido”, documental que retrata la fiesta del *Yumpuno*, rito del paso de los niños a la fase adulta. *De los niños Ikpeng para el mundo* y *Pirinop, mi primer contacto*. La calidad y la originalidad de las producciones permitieron que recaudaran más de 24 premios nacionales e internacionales.

Con estas estrategias, aliadas a la creciente presión del movimiento indígena y al apoyo del Ministerio Público Federal (MPF), los Ikpeng lograron que la Fundación Nacional del Indio (Funai), órgano del Estado brasileño responsable de la ejecución de la política indigenista nacional, creara un grupo de trabajo para llevar a cabo los estudios necesarios para el proceso de demarcación. Sin embargo, hasta hoy el territorio permanece en posesión de granjeros y empresas agropecuarias (Fundación Oswaldo Cruz, 2015).

Otra experiencia interesante de apropiación de las tecnologías de comunicación como estrategia de lucha en un contexto de conflicto ambiental, es el caso de la comunidad quilombola de Conceição das Crioulas, en Salgueiro, en el sertón de la provincia de Pernambuco. En 2014, tras décadas de lucha, la comunidad logró la titularidad de un área de cerca de 900 hectáreas, lo que garantizó la permanencia de cerca de 750 familias en sus tierras.

Es un caso peculiar, pues la comunidad fue fundada y es históricamente liderada por mujeres negras. En los últimos años, han transitado entre las diversas escalas (local a nacional) a fin de garantizar la atención de sus necesidades colectivas y agregar al lenguaje dominante formas autóctonas de negociación simbólica para transmitir la historia de sus antepasadas como un capital simbólico importante. Esto se ha hecho a través de la artesanía, que es vendida no solo por sus características estéticas singulares, sino porque sus muñecas también cuentan las historias de aquellas mujeres, y a través de la constitución de la Criollas Video, una iniciativa de producción audiovisual (Fundación Oswaldo Cruz, 2013).

Rodrigues (2016) relata que el proyecto se originó en un taller de formación que el Grupo Identidades, de Portugal, desarrolló en la escuela de la comunidad. Desde entonces, los jóvenes quilombolas pasaron a grabar sus propios vídeos como forma de registrar la memoria colectiva de su pueblo, sus dilemas y reivindicaciones. Esta producción forma parte de una estrategia de presión y visibilización de sus luchas que fue apropiada por la comunidad y tiene el apoyo de la Asociación Quilombola de Conceição das Crioulas (AQCC).

El audiovisual entra como pieza fundamental cuando se utiliza como registro de la memoria oral de la comunidad, eternizando cosas, lugares y personas y, entonces, construyendo, a partir de la mirada de la cámara y de los realizadores, la narrativa criolla y cerrando un ciclo ancestral de silenciamiento. La construcción de una narrativa quilombola, a través del audiovisual, crea una oportunidad de creación de una voz en primera persona del universo de esa comunidad que raramente se retrata en vídeo. (Rodrigues, 2016: 45, cita traducida al español)

Un último ejemplo del papel estratégico de la comunicación en los casos de conflictos ambientales registrados en el Mapa de Conflictos ocurrió en 2004 en el estado de Bahía. En un caso de transferencia de riesgos ambientales, la empresa Rhodia Brasil decidió que transportaría arena contaminada por organoclorados, residuos de una fábrica de pesticidas que estaban depositados desde hacía más de diez años en una estación de espera en São Vicente / SP para ser incinerada por Cetrel SA en el Polo Petroquímico de Camaçari, región metropolitana de Salvador de la provincia de Bahía. Esta “solución” fue establecida por la empresa tras décadas de presión de los movimientos sociales paulistas organizados en torno a la lucha contra los contaminantes orgánicos persistentes (COPs). Estas sustancias son altamente tóxicas.

Sin embargo, esa “destinación final” de las sustancias fue considerada inadecuada por los movimientos sociales paulistas que en una rápida acción de comunicación (a través de una lista de correos electrónicos mantenida por la Red Brasileña de Justicia Ambiental) y articulación, accionaron una red de movimientos sociales ambientalistas en Bahía que movilizaron a la población local para impedir la entrada de los camiones que cargaban el material para ser incinerado en el Polo Petroquímico. La oposición a este tipo de incineración se debió a la constatación de que ya había sido apuntada su ineficacia para el tratamiento de los contaminantes presentes en la arena y la empresa insistió en utilizarla aprovechándose de una legislación ambiental menos rigurosa sobre el tema en Bahía. Las denuncias y acciones de la alianza de los movimientos sociales paulistas y bahianos llevó el caso a los tribunales, que decidieron entonces la suspensión de la operación de incineración (Fundación Oswaldo Cruz, 2009).

Estos ejemplos demuestran cómo los movimientos sociales involucrados en conflictos ambientales se han utilizado de forma estratégica en las diversas tecnologías de información para el mantenimiento de sus modos de vida tradicionales o garantizar la salud colectiva de sus comunidades en situaciones de enfrentamiento de los riesgos ambientales. Es interesante observar que la mayoría de esos pueblos y comunidades viven cotidianamente marcados por las desigualdades sociales y en modos de vida que en la mayoría de las veces (como en el caso de los pueblos indígenas y quilombolas) se basan en culturas cuyas interacciones con los ecosistemas prescinden de la incorporación intensiva de la tecnología mecanizada, química y OGMs, como ocurre, por ejemplo, en una gran propiedad rural integrada a la agricultura comercial.

La incorporación de tecnologías y estrategias de comunicación constituyen, por lo tanto, innovaciones necesarias para el mantenimiento de sus modos de vida y los agentes de esos procesos generalmente están en diálogo con movimientos sociales que se articulan tanto globalmente con las grandes ONG y los financiadores internacionales, como con las comunidades que sufren los principales impactos del modelo de desarrollo.

Al articularse con esos movimientos y pasar a transitar por espacios extraterritoriales, los líderes y los jóvenes de esas comunidades pasan al mismo tiempo a constituirse como representantes de sus pueblos en esos espacios, y como traductores interculturales que posibilitan el establecimiento de estrategias innovadoras de lucha desde el punto de vista del aprendizaje con los movimientos globales. Por otro lado, la actuación global de los movimientos de raíces territoriales fuertes como el movimiento indígena, quilombola, de los trabajadores rurales sin tierra, pescadores artesanales, y tantos otros pueblos tradicionales desafían a los movimientos globales a redefinir sus conceptos, horizontes de lucha e incluso estrategias de intervención. El diálogo intercultural propuesto por Santos (2007) es una doble vía, donde todos los involucrados perciben los límites y lo incompleto de sus sistemas simbólicos para avanzar en estrategias y visiones de mundo más emancipatorias, sociales, ambientales y cognitivamente más justas.

Las estrategias de comunicación de los movimientos sociales caracterizados por Martínez-Alier (2011) como “ecologismo de los pobres” forman parte, por lo tanto, de un rol de innovaciones en las luchas sociales que buscan preservar o recuperar las condiciones territoriales y ambientales que garantizan su reproducción social y salud en interacciones cotidianas con ecosistemas sostenibles (Parajuli, 2006).

Como señala Araújo (1999), la comunicación no es sólo un sistema cerrado donde emisores y receptores intercambian información. Es, ante todo, un momento de negociación de capitales simbólicos distintos, y el establecimiento de un campo jerarquizado donde los espacios de diálogo no son socialmente reconocidos como socialmente equivalentes e igualmente relevantes. Las estrategias de comunicación de los movimientos sociales involucrados en conflictos ambientales, es también un intento de hacer que sus voces sean escuchadas y creíbles. Son disputas para la superación tanto de la invisibilidad social como de la hegemonía de los discursos especializados.

Es importante ampliar la comunidad de pares, como preconizan autores de la propuesta de una ciencia post-normal (Funtowicz & Ravetz, 1997) usados en la ecología política, pero también es necesario disputar diariamente una estructura social de comunicación que tiende a establecer jerarquías incluso entre pares. Es necesario luchar por la equidad en la comunicación en contextos de conflicto, como también es necesario disputar las áreas estatales de decisión y las condiciones de apropiación e interacción con los bienes comunes.

Para superar el discurso desarrollista que hegemoniza las políticas públicas (económicas y sociales) en Brasil, los movimientos sociales ambientalistas y ecoterritoriales están teniendo que construir estrategias para que sus voces sean escuchadas y comprendidas por un público cada vez más heterogéneo. La formulación y propagación de conceptos alternativos integrados como modos

de vida más sostenibles y justos como los de *buen vivir*, la justicia ambiental, los derechos de la naturaleza o la economía solidaria son estratégicos para ese proceso de lucha y contestación al “pensamiento único” que sostiene los avances de las políticas neoliberales (incluso en gobiernos supuestamente progresistas) (Svampa, 2016; Gudynas, 2016).

Por esos motivos, nosotros que elaboramos y disponemos del Mapa de Conflictos también estamos constantemente en busca de nuevas formas de profundizar dentro de nuestro papel como sistematizadores, y ampliar la divulgación de esas experiencias que pueden ser importantes para aquellos grupos que aún inician sus luchas socioambientales o están inmersos en un punto muerto político y judicial en los contextos donde viven.

Una de esas estrategias que recientemente hemos buscado es establecer convenios que puedan garantizar que tales informaciones lleguen a aquellos que tienen el deber institucional de defender los derechos de esos pueblos y comunidades. En 2016, por ejemplo, establecemos una alianza con el Ministerio Público Federal (MPF) para que las informaciones del Mapa pudieran integrar el sistema de informaciones que los fiscales federales de la 6ª Cámara de Coordinación y Revisión consultan para consolidar las acciones civiles públicas que se mueven en defensa de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales.

Con el mismo objetivo, establecimos el año anterior un convenio con la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) para ampliar la integración de nuestro Mapa de Conflictos al sistema de informaciones del Centro de Documentación Don Tomás Balduino, que desde la década de 1960 registra conflictos en el país. Su importante base de datos proporciona información para la publicación de conflictos en el Campo en Brasil, que la entidad publica anualmente y consideramos importante no solo tener acceso a esas informaciones para que pudiéramos ampliar la calidad



de nuestros registros, sino también consideramos que nuestra metodología podría contribuir a sistematizar y divulgar el material estratégico que estaba organizado en un sistema hasta entonces cerrado al acceso público.

Otro mecanismo que hemos adoptado para ampliar la divulgación de los casos que sistematizamos es el mantenimiento de un perfil institucional en Facebook. Esta red social cuenta hoy con más de mil millones de usuarios en todo el mundo y ha sido un importante espacio de militancia de los movimientos sociales con los que nos relacionamos. De esta forma, consideramos importante nuestra presencia allí, para alcanzar a un público aún no comprometido en las cuestiones socioambientales y muchas veces poco sensibilizado para las graves amenazas que tales situaciones generan para sus propias vidas.

Además, hemos realizado constantes cambios en la página de la plataforma en Internet para hacer su navegación más intuitiva y facilitar el filtrado de los casos para aquellos usuarios que entran en ella movilizados por intereses específicos. Así, hoy ya es posible tanto realizar búsquedas por palabras clave como por estado, población involucrada o sector productivo o política pública que generan los conflictos ambientales. Originalmente solo la búsqueda por provincia (estado en portugués) y las palabras clave estaban disponibles.

De esta forma, actualmente el Mapa de Conflictos es una plataforma multifacética de sistematización y divulgación de informaciones, que también se ha transformado para continuar cumpliendo el objetivo prioritario de ser un instrumento de lucha de los movimientos socioambientales.

## 5. Conclusiones

Para concluir, podemos reflexionar sobre cómo herramientas como el Mapa se integran con la dimensión comunicativa en la Economía Política del Desarrollo. El tema del conflicto es central aquí, pues subraya el rol del neoextractivismo como modelo de desarrollo explotador de la naturaleza y de las poblaciones del Sur Global con el objetivo de producir *commodities* minerales y agrícolas. Muchas de las actividades económicas que generan los conflictos son la minería, la extracción de petróleo y gas, infraestructura (carreteras, mega-represas), agricultura industrial con el uso intensivo de agroquímicos, a menudo con el apoyo de las instituciones gubernamentales.

Al mismo tiempo, los conflictos revelan posibilidades de resistencias populares y búsqueda de alternativas para otro modelo de sociedad. La emergencia e intensificación de conflictos ambientales transcurren desde una visión economicista y restrictiva del desarrollo pautada por criterios productivistas y consumistas que no respetan la vida humana y de los ecosistemas, además vulnera la cultura y los valores de los pueblos en los territorios donde las inversiones y las cadenas productivas se realizan. Las reacciones por parte de movimientos sociales, grupos y poblaciones que ven vulnerados sus derechos fundamentales contribuyen para repensar conceptos como naturaleza, salud, trabajo, cultura y desarrollo (Martinez-Alier *et al.*, 2014).

En estos contextos, la comunicación no es solo parte de una estrategia de lucha, sino también un campo de disputas que si en algunos contextos pueden involucrar distintas formas de concebir el desarrollo, en otros, buscan su superación. La construcción de una sociedad que no tenga el concepto economicista de desarrollo como horizonte de todos los pueblos, que pueda estar abierta a políticas sociales que apunten prioritariamente a la valorización de la vida y de las organizaciones comunitarias, puede parecer utópica en un escenario de globalización neoliberal, pero no deja de ser el horizonte de lucha de muchos grupos que creen que otro mundo es posible.

Consideramos que si las personas históricamente más vulnerables y discriminadas –no solamente de Brasil y América Latina– se disponen a organizarse y luchar por mejores condiciones de vida y para preservar lo que ellas consideran esencial –hay muchos pueblos que lo llaman de sagrado– para su supervivencia física y cultural, es nuestro deber, como miembros de la academia y parte de un grupo social privilegiado, apoyar esas luchas de las formas que nos sean posibles. Comprendemos que el compromiso de la investigación debe ser con la acción para transformar realidades cada vez más injustas e inicuas.

## Bibliografia

---

- ARAÚJO, I. S. (1999). Relações interétnicas e negociação simbólica ou Seriam os índios pós-modernos? *Revista ECO*, 4(1), (pp. 35-46).
- CARVALHO, D. & CARVALHO, A. (2011). Desindustrialização e reprimarização da economia brasileira contemporânea num contexto de crise financeira global: conceitos e evidências. *Revista Economia Ensaio*, 26(1), (pp. 35-64).
- FASANELLO, M. T., ARAUJO, I. S. & PORTO, M. F. S. (2016). Produção audiovisual nas lutas dos movimentos sociais do campo no Brasil: dimensões comunicacional e epistemológica. *Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital*, 5(2), (pp. 118-147).
- FOSTER, J. B. (2005). *A ecologia de Marx: materialismo e natureza*. Rio de Janeiro, Brasil: Editora Record.
- FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. (2016). Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil. Recuperado de <https://is.gd/CJqSYk>
- FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. (2009). BA - Organizações baianas e entidades paulistas atuam em rede e impedem transferência interestadual de resíduos altamente tóxicos para incineração na Bahia. Recuperado de <https://goo.gl/vALXn6>
- FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. (2013). PE - Comunidade Quilombola de Conceição das Crioulas luta por demarcação de território tradicional. *Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil*. Recuperado de <https://goo.gl/3Zd3A6>
- FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. (2015). MT - Povo indígena Ikpeng reivindica retorno ao seu território originário, atualmente ocupado por agricultores e fazendeiros. *Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil*. Recuperado de <https://goo.gl/cdjgWx>
- FUNTOWICZ, S. & RAVETZ, J. (1997). Ciência pós-normal e comunidades ampliadas de pares face aos desafios ambientais. *História, Ciência e Saúde – Manguinhos*, 4(2), (pp. 219-230).

- GUDYNAS, E. (2012). Estado compensador y nuevosextrativismos. *Nueva Sociedad*, 237, (pp. 128-146).
- GUDYNAS, E. (2016). Transições ao pós-extrativismo: sentidos, opções e âmbitos. En G. DILGER, M. LANG y J. PEREIRA FILHO (Eds.), *Descolonizar o imaginário. Debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento* (pp. 174-213). San Pablo, Brasil: Elefante, Fundação Rosa Luxemburgo y Autonomia Literária.
- HIDALGO-CAPITÁN, L. A. (2011). Economía política del desarrollo: La construcción retrospectiva de una especialidad académica. *Revista de Economía Mundial*, (28), (pp. 279-320).
- LÖWY, M. (2005). What is ecosocialism? *Capitalism Nature Socialism*, 16(2), (pp. 15-24).
- MARTINEZ-ALIER, J. (2011). *O ecologismo dos pobres. Conflitos ambientais e linguagem de valoração*. San Pablo, Brasil: Contexto.
- MARTINEZ-ALIER, J., ANGUELOVSK, I., BOND, P., DEL BENE, D., DEMARIA, F., GERBER, J-F. & YÁNEZ, I. (2014). Between activism and science: grassroots concepts for sustainability coined by Environmental Justice Organizations. *Journal of Political Ecology*, 21(1), (pp. 19-60).
- MILANEZ, B. & SANTOS, R.S.P. (2013). Neoextrativismo no Brasil? Uma análise da proposta de um novo marco legal da mineração. *Revista Pós Ciências Sociais*, 10(19), (pp. 119-147).
- O'CONNOR, J. (2001). *Causas Naturales: Ensayos de Marxismo Ecológico*. México: Siglo XXI.
- PARAJULI, P. (2006). Retornando ao lar terra: etnicidades ecológicas e diversidades bioculturais na idade da ecologia. En S. HERCULANO, S. & T. PACHECO (Eds.), *Racismo ambiental. I Seminário Brasileiro Contra o Racismo Ambiental*. Rio de Janeiro, Brasil: Projeto Brasil Sustentável e Democrático, FASE y UFF.

- PORTO, M. F. S., PACHECO, T. & LEROY, J. P. (2013). *Injustiça ambiental e saúde no Brasil. O mapa de conflitos*. Rio de Janeiro, Brasil: Editora Fiocruz.
- RODRIGUES, A.R. (2016). Contar para o mundo: a produção audiovisual em Conceição das Crioulas. *Textos Graduados*, 2(1), (pp. 39-54).
- SANTOS, B. S. (2006). *A gramática do tempo: para uma nova cultura política*. San Pablo, Brasil: Cortez y Porto, Portugal: Afrontamento.
- SANTOS, B. S. (2007). Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, (78), (pp. 3-46).
- SANTOS, B. S. (2013). *Nas mãos de Alice*. San Pablo, Brasil: Cortez y Porto, Portugal: Afrontamento.
- SVAMPA, M. (2016). Extrativismo neodesenvolvimentista e movimentos sociais: um giro ecoterritorial rumo a novas alternativas? En G. DILGER, M. LANG & PEREIRA J. FILHO (Eds.). *Descolonizar o imaginário. Debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento*. San Pablo, Brasil: Elefante, Fundação Rosa Luxemburgo y Autonomia Literária.
- WALSH, C. (2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado. En *Tabula Rasa*, (9), (pp. 131-152).

## Biografías

---

Doctor en Salud Pública, investigador de la Escuela Nacional de Salud Pública, Fundación Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro, Brasil); Investigador visitante del Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra (Portugal).

### **Marcelo Firpo de Souza Porto**

[mfirpo2@gmail.com](mailto:mfirpo2@gmail.com)

Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra (Portugal)

Doctor en Salud Pública, Doctor en Sociología, Becario de la Escuela Nacional de Salud Pública, Fundación Oswaldo Cruz, (Rio de Janeiro, Brasil).

### **Diogo Ferreira da Rocha**

[diogo.f.rocha@gmail.com](mailto:diogo.f.rocha@gmail.com)

Fundación Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro, Brasil)